



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, agosto 3 de 2022

Radicado: **05001 31 05-008-2019-00552-01**
Demandante **FERNANDO GREGORIO DIAZ DAZA**
Demandados: **COLPENSIONES Y LA AFP COLFONDOS SA**
Asunto: **APELACIÓN AUTO QUE NIEGA REFORMA A LA DEMANDA**

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se constituyó en audiencia pública en el presente proceso ordinario laboral de la referencia con el fin de dictar el auto correspondiente. El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiéndose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente, doctor DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN.

ANTECEDENTES

Dentro del proceso ordinario laboral Fernando Gregorio Diaz Daza convoca por pasiva al Colfondos y a Colpensiones pretendiendo se establezca que dada la falta de información veraz sobre las consecuencias del cambio de régimen pensional este es ineficaz, como tampoco produce efectos el reconocimiento pensional que fuera concedido por Colfondos a partir del mes de noviembre de 2016. Solicita se ordene el regreso automático al régimen de prima media, con el retorno de todos los recursos que la AFP captó y con ello Colpensiones proceda al reconocimiento pensional en los términos de la Ley 797 de 2003, con el pago del retroactivo desde el 11 de junio de 2019, la igual que los intereses de mora de

que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Solicita que de existir diferencia entre el capital que se retorne y aquel que hubiera acopiado en Colpensiones, sea Colfondos quien lo asuma.

Demanda admitida con providencia del 26 de septiembre de 2019 en la que se dispuso notificar a las accionadas (archivo N° 4), siendo presentada la contestación por parte de Colpensiones el 18 de diciembre de 2019 (archivo N° 8) y por la accionada Colfondos el 6 de febrero de 2020, entidad que a su turno presentó demanda de reconvención contra el actor, para que en el evento que se declare la ineficacia de la afiliación, se establezca la obligación del señor Díaz Daza de reintegrar todas las sumas recibidas por concepto de mesada pensional con la debida indexación (archivos N° 12 y 14)

Contestaciones y demanda de reconvención que fueron aceptadas con providencia del 13 de febrero de 2020 (archivo N° 15), frente a la última el actor presentó contestación el 18 de febrero de 2020 (archivo N° 18), de donde con providencia del 19 de febrero de 2020 se aceptó la contestación a todos los escritos de demanda, por todas las partes (archivo N° 17).

Luego en auto del 20 de abril de 2021 se dispuso la remisión del proceso al juzgado 24 Laboral del Circuito de Medellín, despacho que fue creado por el Acuerdo CSJANTA 21-16 de 24 de febrero de 2021 (archivo N° 18).

Con escrito del 29 de abril de 2021 la activa introdujo una reforma a la demanda, donde además de las condenas establecidas en el escrito inicial se plantearon Pretensiones declarativas accesorias, relativas a un perjuicio causado por la AFP Colfondos por el reconocimiento de una mesada de inferior cuantía a aquella que recibiría por Colpensiones

Con providencia del 7 de junio de 2022 tras efectuarse la migración al Juzgado 24 Laboral del Circuito de Medellín, se fijó fecha para la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS. Respecto a la reforma a la demanda esta se negó al

considerarla extemporánea en tanto la última notificación a la pasiva se consiguió el 23 de enero de 2020 (archivo N° 23)

Inconforme con la decisión fue recurrida por la activa exponiendo que de cara al principio de favorabilidad ha de preferirse la interpretación que resulte más beneficiosa al trabajador, divergencia interpretativa que surge en el presente evento teniendo en cuenta el artículo 28 del CPTSS y el 93 del CGP, este último consagra un término diferente para la reforma a la demanda el que debió aplicarse bajo el amparo del principio aludido (archivo N° 25).

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 ninguna de las partes se pronunció.

CONSIDERACIONES

De acuerdo a los hechos narrados, es claro que el proceso se remite a esta instancia para resolver el recurso de apelación frente al auto que negó la reforma a la demanda, asunto del que es competente esta Sala, conforme al numeral 1° del artículo 65 del C.P.T y de la S.S.

Ahora, atendiendo a las premisas expuestas, las diferentes actuaciones surtidas en el trámite y ceñido a los aspectos de apelación, en este evento se encuentra por fuera de duda que:

- 1) El escrito de reforma a la demanda fue presentado pasado más de 1 año luego de haberse surtido el término de traslado de la demanda inicial y su reconvención, en tanto los escritos de contestación de Colpensiones y la AFP Colfondos se cumplieron el 18 de diciembre de 2019 y 6 de febrero de 2020 (respectivamente), mientras que la contestación a la demanda de reconvención se generó el 18 de febrero de 2020; luego con providencia del 19 de febrero de 2020 se aceptó la contestación a la demanda inicial y de reconvención. Es así

que entre estas datas y la presentación de la demanda de reconvención el 29 de abril de 2021, transcurrió con creces el término establecido en el artículo 28 del CPTSS, esto es “cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvención”.

- 2) La activa recurre la providencia que negó la reforma a la demanda pretendiendo se apliquen los términos establecidos en el artículo 93 del CGP.

Pues bien, sea lo primero indicar que la activa estructura su impugnación en razón a la aplicación al principio de favorabilidad, sin embargo, realiza una mezcla conceptual en tanto alude de forma indistinta a este y a la regla *in dubio pro operario*, figuras que si bien tienen un fin común, cual es nivelar las diferencias entre empleador y trabajador, operan de forma diversa.

Para efectos de establecer ambos principios resulta útil acudir al doctrinante Iván Daniel Jaramillo Jassir, quien en el texto “Principios Constitucionales y legales del derecho del trabajo en Colombia” (2020) explica el contenido del *Principio Protector* como aquel que compensa el desequilibrio entre los sujetos de la relación labor, principio que opera cuando existe conflictos en la aplicación, interpretación y tránsito normativo.

Es así que el Principio Protector contiene tres sub principios a saber: el principio de favorabilidad, la condición más beneficiosa y la regla del *in dubio pro operario*. El primero de ellos **principio de favorabilidad** establece que ante la multiplicidad normas aplicables, se optará por aquella más favorable; a su turno **la condición más beneficiosa** también opera como selección entre normas, pero en los eventos de sucesión normativa, mientras que el ***in dubio operario*** corresponde a la elección de la interpretación más favorable de una norma.

Ahora, en tratándose del principio de favorabilidad en el ámbito del derecho laboral el canon legal establece que la elección entre normas se restringe a la normatividad de esta especialidad, en tanto no es posible una comparación con disposiciones de otra materia; al respecto los artículos 20 y 21 del CST:

ARTICULO 20. CONFLICTOS DE LEYES. En caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquéllas.

ARTICULO 21. NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad

En el mismo sentido la Sala de Casación Laboral de la CSJ en providencia Radicado 5374 de mayo 6 de 1993, en un caso que se pretendía dar aplicación prevalente a normas mercantiles en exclusión del sistema normativo laboral, indicó:

“...este precepto sobre la aplicación de la norma más favorable opera únicamente en caso de conflicto o duda entre “normas vigentes de trabajo” pero no cuando el conflicto de leyes se suscita entre las del trabajo y otras no laborales. En caso de esta última hipótesis siempre – y sin excepción posible fundada en una supuesta y no demostrada favorabilidad o en otra consideración de cualquier otra índole que ella sea- deberá preferirse las leyes del trabajo. Así clara e imperativamente lo establece el artículo 20 del CST”

Con estos contornos se descende al **caso concreto** donde el recurrente, acudiendo a reflexiones sobre los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, pretende que para efectos de contabilizar el término de presentación de la reforma a la demanda se excluya la norma adjetiva laboral y se sustituya por el Código General del Proceso, pretensión que no tiene vocación de éxito como se explica:

El recurrente de forma indistinta se refiere a los principios favorabilidad e in dubio pro operario, sin que este último venga al caso en tanto el artículo 28 del CPTSS y para el caso concreto, no ofrece duda, por tanto el operador judicial no se enfrenta a un escenario de múltiples interpretaciones.

Ahora en relación al principio de favorabilidad y atendiendo a su consagración legal en la regulación laboral (artículos 20 y 21 CST) el ejercicio de contraste se

realiza cuando existe divergencia de normas de la especialidad laboral, sin que sea posible realizar una búsqueda en los diferentes regímenes procesales, como tampoco es posible acudir de forma directa al CGP en tanto no existe un vacío normativo que deba ser suplido a través de la regla de integración normativa.

En adición debe tenerse en cuenta que el juicio de favorabilidad no se aplica en tratándose de normas procesales, en tanto las mismas tienen un carácter imparcial, reglan la forma en que se desarrolla el proceso y por tanto ellas no están inspiradas para favorecer a una parte; por el contrario ubican a los litigantes en igualdad de oportunidades, aplica por igual el derecho de defensa y contradicción, por tanto introducir los cambios que propone el recurrente de forma cierta afecta el equilibrio de las partes, lo que de suyo genera una transgresión al debido proceso e igualdad.

Aún más, no debe perderse de vista que el principio de favorabilidad examina las consecuencias generales que trae la elección entre normas y no se introduce como una regla que busque satisfacer necesidades particulares para un caso específico, esto es, no suple insuficiencias probatorias, deficiencia en la estrategia de demanda o defensa, como tampoco excusa el cumplimiento de los términos procesales.

En suma, toda vez que la regulación adjetiva laboral establece de forma cierta y única los términos de presentación de la reforma a la demanda, sin que sea necesario acudir al CGP en tanto no existe un vacío legal, como tampoco resulta procedente introducir elementos de favorabilidad a un evento en que se excedieron los términos para una actuación procesal, imprósperas son las súplicas de la activa, conclusión expuesta por la A quo y que se confirma en esta instancia.

Atendiendo las reglas del artículo 365 del CGP se condena en costas a la activa, tasando las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA** la providencia que por vía de apelación se revisa. Costas en esta instancia a cargo de la activa, de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de \$500.000

Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para la continuación del trámite.

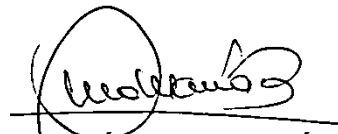
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 8 de agosto de 2022